



CONSTANCIA SECRETARIA. Túquerres, 21 de julio de 2023. En la fecha doy cuenta a la señora Jueza con la presente acción de tutela No. 52-838-31-03-001-2023-00066, instaurada a nombre propio por el señor LUIS ALBERTO CUASPUD MUESES en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y la REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA, la cual correspondió por reparto a este Juzgado. Sírvasse proveer.


OMAR FERNANDO GOYES CAICEDO
Escribiente

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO

Túquerres, veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Sustanciación No. 0129

Referencia:	Acción de Tutela
Radicación:	52-838-31-03-001-2023-00066-00
Accionante:	Luis Alberto Cuaspud Mueses
Accionadas:	Registraduría Nacional del Estado Civil y Registraduría Municipal del Estado Civil de Mallama

Actuando en ejercicio de la acción consagrada por el artículo 86 de la Constitución Política, el señor LUIS ALBERTO CUASPUD MUESES, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.014.801 expedida en Ipiales (N), en forma personal, interpuso acción de tutela en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA, por considerar que se le han vulnerado sus derechos fundamentales al de elegir y ser elegido, al debido proceso, igualdad, el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, consagrados por la Carta fundamental, en razón de ostentar la calidad de militante y candidato al concejo Municipal de Mallama, Nariño.

SE CONSIDERA:

Este Despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que de conformidad a lo señalado en el Decreto 1983 del 30 de Noviembre de 2017, artículo primero numeral 2, por el cual se modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

Teniendo en cuenta la informalidad que gobierna la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, se observa que la solicitud reúne los requisitos señalados en los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

Se observa en el escrito referido, solicitud de medida provisional, consistente en ordenar a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y SUS DEPENDENCIAS EN COLOMBIA**, autorice la inscripción a los militantes del Movimiento de Autoridades indígenas de Colombia AICO en el aplicativo dispuesto para ello, teniendo en cuenta que, dentro del calendario electoral, dicho registro se habilita desde el 29 de junio hasta el 29 de julio de 2023, en razón a la contienda electoral regional a celebrarse en el mes de octubre de 2023.

Lo anterior, debido a que, a su juicio, al no decretarse la medida cautelar, se estaría negando los derechos fundamentales, de (5. 000) cinco mil militantes y candidatos que buscan participar a las elecciones regionales del 29 de octubre del 2023.

Frente a la medida provisional en sede de tutela, el artículo 7º del Decreto 2591 de 1.991, señala lo siguiente:

"Artículo 7º. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado."

Como se desprende de la norma citada, el juez constitucional dispone de una amplia competencia que le permite, a petición de parte o de oficio, "dictar cualquier medida de conservación o seguridad", destinada a "proteger un derecho" o a "evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados."

Ahora bien, al respecto la Honorable Corte Constitucional ha fijado unos requisitos para tener en cuenta, al momento de considerar la aplicación de una medida provisional, en aras de evitar el uso inadecuado de tal medida, así:

"(i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris); (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección constitucional pretendida pueda verse afectada considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora); y (iii) Que la medida provisional solicitada no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente¹. (...)"

¹ Estos criterios se toman del Auto 312 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), pero han sido actualizados para que no se refieran únicamente a los casos de protección de un derecho a solicitud de parte, sino para que también reflejen el amplio rango de acción de las medidas provisionales de acuerdo con la

Con fundamento en lo previamente expuesto, y descendiendo al asunto de marras, encuentra el despacho que el accionante solicita que se ordené a la Registraduría Nacional del Estado Civil, se autorices la inscripción de los militantes del Movimiento de Autoridades indígenas de Colombia AICO, en el aplicativo dispuesto para ello, en tanto dicho registro se habilitó desde el 29 de junio hasta el 29 de julio de 2023, en razón a la contienda electoral regional a celebrarse en el mes de octubre de 2023.

Observa el despacho que la medida provisional constituye la pretensión de la acción de tutela, frente a la cual, para determinar su procedencia se hace indispensable escuchar a la entidad accionada respecto a los hechos expuestos en la acción constitucional y valorar las pruebas que se lleguen a recaudar en el presente trámite. Lo anterior, aunado a que la tutela tiene un término célere y sumario en el que se resolverá sobre la pretensión referida, lo cual permite negar la medida provisional, no obstante, se requerirá a la accionada para que de manera urgente rinda el correspondiente informe a este despacho.

Aparte de lo descrito aprecia el despacho que la tutela se interpone en el marco de una convocatoria electoral, por ello se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, publicar de manera inmediata la existencia de esta acción de tutela en su página web institucional para efectos de notificación a los eventuales terceros interesados.

Por lo expuesto el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR la solicitud de tutela interpuesta por el señor LUIS ALBERTO CUASPUD MUESES, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.014.801 expedida en Ipiales(N), en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA.

SEGUNDO: Para determinar si se ha vulnerado o existe amenaza de vulneración del derecho fundamental que se señala en el escrito de tutela, solicítese a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA, a través de su representante legal o quién haga sus veces, que en el término improrrogable de DOS (2) días al recibo del oficio correspondiente, rinda el respectivo informe con las pruebas que quiera hacer valer, acerca de los hechos que motivaron la presente acción de tutela.

TERCERO: NEGAR la solicitud de medida provisional conforme a lo argumentado en la parte motiva.

CUARTO: ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, publicar de manera inmediata la existencia de esta acción de tutela en su página web institucional para efectos de notificación a los eventuales terceros interesados.

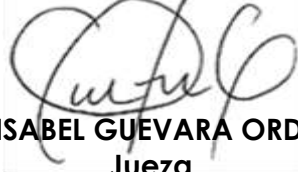
jurisprudencia constitucional. Es decir, incluyendo la posibilidad de medidas provisionales *ex officio*, y para suspender, en favor del interés público, el goce de un derecho viciado. Para ello se tuvieron en cuenta los requisitos inicialmente sintetizados por el Auto 241 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. Ver Auto 680 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 53.

QUINTO: TÉNGASE como pruebas los documentos aportados en el escrito de tutela.

SEXTO: NOTIFICAR por el medio más expedito de esta providencia al accionante, y a las entidades accionadas, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, esto es, de forma expedita, haciendo la advertencia que, en caso de omisión de presentar el informe requerido por el Juez de Tutela, en el plazo otorgados, se dará aplicación a la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Para tal efecto remítase copia del escrito de tutela, pruebas y anexos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ANA ISABEL GUEVARA ORDOÑEZ
Jueza